

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

SEPTIEMBRE 2026

Autores: Vicente Abrigo, Andrés Musalem, Alejandra Ríos
Elaborado a partir de CASEN 2017, 2022 y 2024, y Censo 2024

1. INTRODUCCIÓN

La inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad es uno de los desafíos persistentes de la política social en Chile. A pesar de avances normativos importantes, como la Ley N.º 20.422 y la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, las brechas en empleo, educación e ingresos siguen siendo significativas.

Para abordar este fenómeno, Chile cuenta con tres fuentes de información complementarias: los Censos de Población y Vivienda, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) y la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE). Cada una de ellas tiene especificidades metodológicas importantes para tener en cuenta. Los tres instrumentos permiten dimensionar la magnitud y evolución de la población con discapacidad utilizando la metodología del Grupo de Washington para identificar situaciones de discapacidad. Este enfoque entiende la discapacidad no solo como una condición de salud, sino como limitaciones funcionales que dependen de la interacción entre la persona y su entorno. En ese sentido, una misma condición puede traducirse en distintos niveles de dificultad según el contexto en que se desenvuelve, lo que pone el foco en las barreras del entorno además de la condición de salud individual.

Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas diferencias entre los instrumentos mencionados, dada su relevancia para la medición y caracterización de la discapacidad. El Censo logra representatividad comunal, mientras CASEN y ENDIDE la tienen a nivel regional, pero ENDIDE logra esa representatividad solo en personas adultas, ya que para la población entre los 2 y 17 años tiene representatividad nacional. Otra diferencia entre los instrumentos es la versión de cuestionario que se utiliza, ya que tanto el Censo como CASEN utilizan una versión abreviada desarrollada por el Grupo de Washington, diseñada específicamente para incorporarse a encuestas nacionales que tienen otros objetos principales de medición y, por lo tanto, cuentan con espacio limitado para incorporar nuevas variables. Por otra parte, la ENDIDE está enfocada solamente en discapacidad, utilizando una versión extendida de cuestionario con submódulos que permiten identificar la capacidad y desempeño de la persona, clasificar por tipo y severidad de la discapacidad, así como medir el grado de su dependencia. De las tres ediciones que tiene ENDIDE, solo las últimas dos son comparables ya que se realizaron cambios metodológicos que modificaron de forma importante sus índices y resultados. Por otra parte, la encuesta CASEN es la que tiene la mejor estandarización en serie histórica para la caracterización socioeconómica de los hogares en Chile.

En este documento utilizamos la evidencia socioeconómica de CASEN, complementada con datos del Censo, para analizar en profundidad la realidad laboral, educacional y de ingresos de los hogares con personas con discapacidad en Chile. Esta opción tiene varias razones. Primero, desde el punto de vista de cómo miden la discapacidad, las encuestas CASEN y el Censo son las que mantienen una mayor comparabilidad metodológica entre ellas, ya que ambas utilizan la misma versión abreviada de 6 preguntas insertas dentro de sus respectivos protocolos de encuesta. En segundo término, CASEN mide en detalle variables sobre educación, trabajo e ingresos cuyos resultados utiliza en general el Estado de Chile para la toma de decisiones en la implementación de política social y, por lo tanto, es información validada transversalmente para orientar políticas públicas focalizadas para personas con discapacidad.

Las políticas orientadas a este grupo han ganado relevancia en los últimos años, dado que las limitaciones que imponen los factores ambientales y sociales no solo afectan las actividades cotidianas, sino que también impactan directamente en las oportunidades de trabajo y educación,

y, en consecuencia, los niveles de pobreza y calidad de vida. Como veremos en este documento, las personas con discapacidad superan el 10% de la población en Chile. Uno de los principales avances ha sido la Ley N.º 21.015, conocida como Ley de Inclusión Laboral, que establece que las empresas y organismos públicos con 100 o más trabajadores deben destinar al menos un 1% de su dotación a personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Este marco se ha ido actualizando: la Ley N.º 21.275 exige a las empresas contar con gestores de inclusión laboral, y la Ley N.º 21.690 de 2024 establece que dicha cuota aumentará al 2% de forma gradual, una vez que el 80% de las empresas obligadas acredite el cumplimiento del 1% vigente. Sin embargo, como se discutirá más adelante, las cifras actuales de cumplimiento sugieren que ese umbral aún está lejos de alcanzarse.

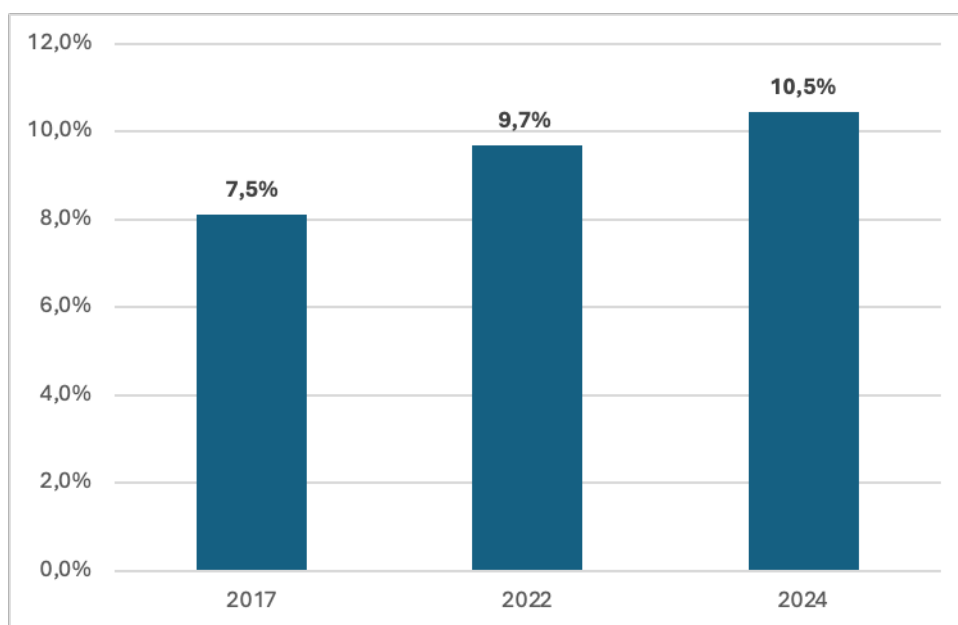
Este documento realiza un análisis que combina información de los Censos, la ENDIDE 2022 y de las versiones 2017, 2022 y 2024 de la CASEN para caracterizar a la población con discapacidad, considerando su composición demográfica, su posición socioeconómica, su inserción en el mercado laboral y el sistema educativo. El objetivo es aportar una mirada descriptiva que permita dimensionar las brechas existentes y contribuir a la discusión sobre políticas públicas más efectivas en esta materia.

2. ¿CUÁNTOS SON Y QUIÉNES SON?

2.1 Una población que crece

La proporción de personas con discapacidad ha aumentado de forma sostenida en el período analizado. Parte de este incremento puede asociarse a una mayor sensibilización y a mejoras en la medición, pero también responde a cambios demográficos, particularmente al envejecimiento de la población, dado que la prevalencia de limitaciones funcionales tiende a aumentar con la edad. A partir de las encuestas CASEN 2017, 2022 y 2024, estimamos la evolución de esta proporción durante los últimos años, cuyos resultados se presentan en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Proporción de personas con discapacidad (CASEN 2017-2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2017, 2022 y 2024.

Nota: Porcentaje de personas de 5 años o más con discapacidad, definida como dificultad severa (mucha dificultad) o total (no puede hacerlo) en al menos uno de los seis dominios funcionales considerados por CASEN.

Los resultados muestran un aumento sostenido de la prevalencia de discapacidad, desde un 7,5% en 2017 hasta un 10,5% en 2024, superando por primera vez los dos dígitos en la serie analizada.

Para complementar esta estimación, la Tabla 1 presenta los resultados obtenidos a partir de otras fuentes disponibles. El Censo 2024 estima una prevalencia de 11,1%, cifra cercana al 10,5% registrado por CASEN para el mismo año. ENDIDE 2022, por su parte, entrega una estimación superior, de 17,6%. Como se explicó anteriormente, esta última cifra no es directamente comparable con las anteriores, debido a que ENDIDE utiliza un instrumento más extenso y una población de referencia distinta. En conjunto, las tres fuentes permiten dimensionar la relevancia que tiene actualmente la discapacidad dentro de la población chilena.

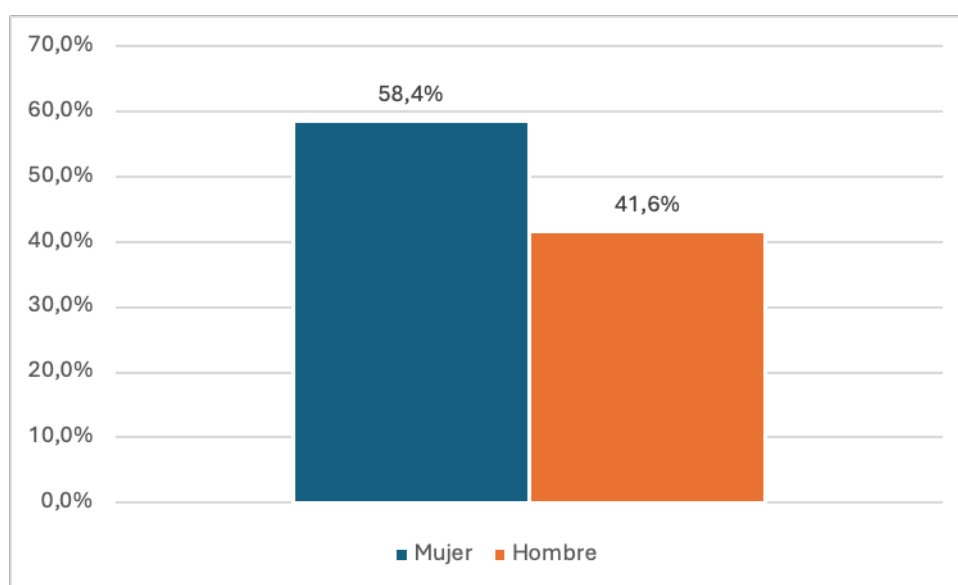
Tabla 1: Proporción de personas con discapacidad (2017-2024)

Prevalencia de discapacidad (% pob.)	2017	2022	2024
CASEN	7,5%	9,7%	10,5%
CENSO	-	-	11,1%
ENDIDE	-	17,6%	-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2017, 2022 y 2024, ENDIDE 2022, Censo 2024.
Nota: Indicador CASEN y CENSO: Grupo de Washington (dificultad severa o total en al menos un dominio funcional), en población de 5 años y más. Indicador ENDIDE: Grupo de Washington (discapacidad leve, moderada y severa), en población de 2 años y más.

A partir de este punto, complementamos el análisis con información del Censo 2024. Su cobertura permite caracterizar con mayor detalle la composición de esta población en el período más reciente, tanto en términos demográficos como territoriales. Según esta fuente, 1.950.388 personas de 5 años o más se encontraban con alguna discapacidad en 2024. De ellas, un 58,4% correspondía a mujeres y un 41,6% a hombres, como se observa en el Gráfico 2.

Gráfico 2: Descomposición por género de personas con discapacidad (2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Censo 2024.
Nota: Población de 5 años o más con discapacidad, por sexo.

Si bien podría pensarse que la discapacidad no debiese presentar diferencias relevantes por género, esta mirada resulta incompleta. La literatura enfatiza que la discapacidad no depende solo de una condición individual, sino también de su interacción con las barreras del entorno, incluyendo el acceso a educación, empleo, servicios y la presencia de discriminación o prejuicios (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [CDPD], 2006). Desde esta perspectiva, las brechas de género sí pueden ser relevantes, ya que las mujeres con discapacidad enfrentan formas de exclusión múltiples, asociadas tanto a desigualdades de género como a discriminaciones por discapacidad (ONU Mujeres, 2021). En Chile cifras similares ya se han evidenciado previamente: Vial y Martínez (2023) muestran que la prevalencia de discapacidad severa en adultos de 18 a 64 años es mayor en mujeres que en hombres, lo que refuerza la importancia de analizar esta dimensión.

En segundo lugar, se analiza la distribución de las personas mayores de 5 años con discapacidad según región. Este ejercicio permite identificar en qué territorios se concentra una mayor cantidad de esta población y, por tanto, dónde podrían existir mayores desafíos para la política pública local, especialmente en materia de accesibilidad, servicios de apoyo e inclusión. Como se observa en la Tabla 2, la distribución territorial no es homogénea. La Región Metropolitana concentra el 35,6% del total de personas con discapacidad, seguida por Valparaíso (10,8%) y Biobío (10,2%). Esto permite advertir que es en esas regiones, siguiendo la distribución territorial de la población general, donde existe un volumen relevante de personas que podrían enfrentar barreras en su interacción cotidiana con el entorno. Sin embargo, la Tabla 2 muestra algo distinto cuando se observa la proporción de personas con discapacidad dentro de cada región. Ñuble presenta la cifra más alta, con un 15,3%, seguida por La Araucanía (13,3%) y Maule (13,1%). Esto pone un foco particular sobre algunas regiones donde la discapacidad tiene un peso especialmente alto dentro de su población. Parte de estas diferencias puede responder a características demográficas, pero también a las condiciones del entorno en que viven las personas. En ese contexto, resulta interesante que la Región Metropolitana se ubique por debajo del promedio nacional, algo que podría estar asociado, entre otros factores, a una mayor disponibilidad de servicios, infraestructura y condiciones de accesibilidad.

Tabla 2: Descomposición geográfica, según región, de población de personas con discapacidad en Chile

Región	Total	Hombres	Mujeres	% de total nacional	% de total regional
Total país	1.950.388	811.489	1.138.899	100%	100%
Metropolitana de Santiago	694.469	282.361	412.108	35,6%	9,9%
Biobío	198.990	82.830	116.160	10,2%	13,0%
Valparaíso	210.218	86.378	123.840	10,8%	11,7%
La Araucanía	127.007	53.581	73.426	6,5%	13,3%
Maule	139.705	59.372	80.333	7,2%	13,1%
O'Higgins	118.376	50.463	67.913	6,1%	12,6%
Los Lagos	93.441	40.135	53.306	4,8%	11,1%
Ñuble	74.711	31.431	43.280	3,8%	15,3%
Coquimbo	86.646	36.422	50.224	4,4%	11,0%
Los Ríos	46.185	19.683	26.502	2,4%	12,2%
Antofagasta	49.876	21.217	28.659	2,6%	8,3%
Atacama	29.182	12.462	16.720	1,5%	10,3%
Tarapacá	32.671	14.064	18.607	1,7%	9,5%
Arica y Parinacota	23.875	10.467	13.408	1,2%	10,4%
Magallanes	14.715	6.100	8.615	0,8%	9,3%
Aysén	10.321	4.523	5.798	0,5%	10,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Censo 2024.

Nota: Población de 5 años o más con discapacidad, por región y sexo. “% de total nacional” = participación de la región en el total país de PcD; “% de total regional” = prevalencia de discapacidad dentro de la propia región.

2.2 Una población eminentemente mayor

La discapacidad no se distribuye de manera uniforme entre grupos etarios. Dado que se trata de una condición que depende tanto de factores individuales como del entorno, es esperable que su prevalencia aumente en edades donde las limitaciones funcionales son más frecuentes. Esto es precisamente lo que se observa en la Tabla 3: mientras las personas sin discapacidad presentan una distribución relativamente equilibrada entre tramos etarios, la población con discapacidad se concentra claramente en edades más avanzadas. En particular, un 56% de las personas con discapacidad tiene 60 años o más.

Tabla 3: Proporción de personas con discapacidad en Chile según rango etario

CASEN 2024	5-14	15-29	30-44	45-59	60+	Total
Sin discapacidad	14%	23%	27%	20%	17%	100%
Con discapacidad	7%	8%	9%	19%	56%	100%
Total	13%	21%	25%	20%	21%	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2024.
Nota: Distribución porcentual por tramo etario al interior de cada grupo.

Este patrón etario tiene implicancias directas en las brechas que se presentan en las secciones siguientes, ya que parte de las diferencias podría atribuirse a la mayor edad de esta población; no obstante, al controlar por edad, veremos que las tendencias no se disipan.

2.3 ¿Qué tipo de dificultades enfrentan?

El Censo 2024 permite identificar los principales tipos de limitaciones funcionales entre las personas con discapacidad. Como se muestra en la Tabla 4, las dificultades más frecuentes corresponden a movilidad, particularmente para caminar o subir escaleras (46,6%), y a la visión (43,4%). Les siguen las dificultades para recordar o concentrarse (25,5%) y para oír (20,5%), mientras que en menor medida se observan limitaciones en el cuidado personal (15,5%) y en la comunicación (10,2%).

Tabla 4: Descomposición por tipo de dificultad

Tipo de dificultad	Personas (severa o total)	% sobre total con discapacidad
Dificultad para caminar o subir escaleras	908.712	46,6%
Dificultad para ver	847.002	43,4%
Dificultad para recordar o concentrarse	498.237	25,5%
Dificultad para oír	399.070	20,5%
Dificultad en el cuidado personal	302.103	15,5%
Dificultad para comunicarse	199.711	10,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Censo 2024.
Nota: Personas con dificultad severa (muchoa dificultad) o total (no puede hacerlo) en cada dominio. Una misma persona puede presentar dificultades en más de un dominio.

Casi la mitad de las personas con discapacidad reporta dificultades severas para caminar o subir escaleras (46,6%), una limitación que puede afectar directamente el acceso al transporte, los espacios físicos y el empleo. Las dificultades para recordar o concentrarse también tienen una presencia importante, alcanzando a uno de cada cuatro personas con discapacidad. Estas cifras muestran, además, que se trata de una población muy diversa: las barreras que enfrenta una persona con dificultades de movilidad pueden ser distintas de aquellas que afectan a alguien con problemas de visión, audición o concentración, lo que también debiera considerarse al momento de diseñar políticas de inclusión.

3. EL PESO SOBRE LOS HOGARES

3.1 Jefes y jefas de hogar

Un aspecto menos visible de la inclusión es el rol que las personas con discapacidad cumplen dentro de sus propios hogares. En CASEN, la figura de jefe o jefa de hogar corresponde a quien es reconocido como referente del hogar, generalmente asociado al principal proveedor. En este contexto, resulta relevante observar su evolución en el tiempo. Como muestra la Tabla 5, la proporción de personas con discapacidad que son jefes/as de hogar ha aumentado de manera sostenida, pasando de 45,9% en 2017 a 50,8% en 2024. Esto implica que hoy más de la mitad de este grupo cumple ese rol dentro de sus hogares.

Tabla 5: Proporción de personas con discapacidad que son jefes/as de hogar

	2017	2022	2024
% de PcD que declaran ser jefes/as de hogar	45,9%	49,3%	50,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2017, 2022 y 2024.

Nota: Porcentaje de personas con discapacidad que declaran ser jefes/as de hogar.

Que más de la mitad de las personas con discapacidad sean jefes o jefas de hogar hace que estas brechas tengan consecuencias que van más allá de su situación individual. Un menor acceso al empleo, menores ingresos o niveles educacionales pueden afectar también a otros integrantes del hogar que dependen de ellos. Por eso, las dificultades de inserción económica de este grupo tienen también una dimensión familiar que vale la pena considerar al momento de pensar las políticas de apoyo.

3.2 Cuidadores: quiénes cuidan

Un aspecto menos explorado de la inclusión corresponde a la caracterización del cuidado. En este sentido, la CASEN 2024 permite identificar si las personas con discapacidad cuentan con apoyo y, cuando este proviene de miembros del hogar, caracterizar a quienes cumplen ese rol. Al analizar el género del cuidador interno, se observa que el cuidado recae mayoritariamente en mujeres: el 65,3% corresponde a cuidadoras, lo que evidencia una distribución de las responsabilidades de cuidado marcadamente desigual por género.

Tabla 6: Distribución de cuidadores internos de personas con discapacidad según género

Sexo del cuidador interno	Distribución (2024)
Mujer	65,3%
Hombre	34,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2024.

Nota: Porcentaje de mujeres y hombres con discapacidad que declaran ser cuidador interno.

A esto se suma la edad de quienes realizan estas labores. Los cuidadores internos tienen, en promedio, 55 años, por lo que una parte importante se encuentra relativamente cerca de la vejez. En muchos casos son padres, cónyuges u otros familiares que pueden enfrentar también

dificultades de salud o de inserción laboral. Esto genera un desafío hacia adelante, dado que algunas de las personas que hoy sostienen estas redes familiares de cuidado podrían requerir apoyo ellas mismas en el futuro.

La alta presencia de mujeres entre los cuidadores también tiene una dimensión laboral. En un contexto donde la participación laboral femenina sigue siendo menor que la masculina, cabe preguntarse en qué medida las responsabilidades de cuidado están limitando la posibilidad de trabajar de una parte de estas mujeres.

4. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

4.1 Pobreza multidimensional

Complementariamente, la encuesta CASEN hace la distribución por quintiles de ingreso autónomo del hogar sin considerar subsidios del Estado, lo que permite ubicar a cada grupo dentro de la estructura de ingresos de mercado. Los datos refuerzan lo que ya sugiere la pobreza multidimensional: las personas con discapacidad se concentran en los quintiles más bajos, y esta tendencia se ha intensificado entre 2022 y 2024.

Los datos de la nueva métrica de pobreza multidimensional de CASEN 2024 muestran una brecha significativa: mientras el 16,2% de las personas sin discapacidad se encuentra en situación de pobreza multidimensional, esa cifra asciende al 27,4% entre quienes tienen discapacidad.

Tabla 7: Porcentaje de personas en pobreza multidimensional, según situación de discapacidad

Situación de pobreza multidimensional	% 2022	Brecha 2022	% 2024	Brecha 2024
Sin discapacidad	18,8%	+8,6 pp	16,2%	+11,2 pp
Con discapacidad	27,4%		27,4%	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2024.

Nota: Pobreza multidimensional según nueva métrica CASEN 2024. Dado que es una métrica nueva, la tendencia comparativa está basada en una estimación oficial de MDSF aplicando la metodología de esta métrica a los datos de CASEN 2022, disponible en observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl.

Una persona con discapacidad tiene actualmente una probabilidad considerablemente mayor de vivir en pobreza multidimensional que una persona sin discapacidad. Cerca de una de cada cuatro se encuentra en esta situación. Además, la diferencia no se limita a los ingresos laborales, ya que este indicador incorpora dimensiones como educación, salud, vivienda y entorno. La brecha observada, por tanto, abarca distintos ámbitos de las condiciones de vida.

4.2 Distribución por quintiles de ingreso

En la misma línea, los datos de la distribución por quintiles de ingreso autónomo son consistentes con lo observado en pobreza multidimensional: las personas con discapacidad se concentran en los quintiles de menores ingresos, y esta concentración también se ha intensificado entre 2022 y 2024.

Tabla 8: Distribución por quintiles según situación de discapacidad

CASEN	Q I 2022	Q I 2024	Q II 2022	Q II 2024	Q III 2022	Q III 2024	Q IV 2022	Q IV 2024	Q V 2022	Q V 2024
Sin discapacidad	20,1%	18,9%	22,4%	23,0%	21,6%	22,4%	19,3%	19,0%	16,6%	16,7%
Con discapacidad	31,2%	35,3%	27,4%	25,7%	21,0%	20,7%	13,4%	12,7%	7,0%	5,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2022 y 2024.
Nota: Distribución porcentual de cada grupo por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar.

Entre 2022 y 2024, la proporción de personas con discapacidad en el quintil más pobre aumentó de 31,2% a 35,3%, mientras que su presencia en el quintil más rico disminuyó de 7,0% a 5,6%. En contraste, la distribución de las personas sin discapacidad se mantuvo prácticamente estable. Los subsidios estatales pueden moderar estas diferencias, pero no las eliminan.

Estas diferencias no deben interpretarse como una relación que funciona en una sola dirección. Las condiciones socioeconómicas pueden influir en el entorno que enfrentan las personas, por ejemplo, a través de diferencias en el acceso a servicios, educación, salud, apoyos o condiciones materiales. Pero también puede ocurrir lo contrario: las barreras asociadas a la discapacidad pueden dificultar la educación, la entrada al mercado laboral o la posibilidad de sostener trayectorias laborales estables. Los datos muestran, por tanto, una asociación importante entre discapacidad y menores ingresos, aunque por sí solos no permiten establecer cuánto de esa relación responde a cada uno de estos mecanismos.

5. EDUCACIÓN Y MERCADO LABORAL

5.1 Brechas educativas persistentes

La educación es uno de los principales canales de movilidad social y también uno de los espacios donde las brechas son más pronunciadas. La educación forma un continuo con las oportunidades que presenta posteriormente el mercado laboral. Más de seis de cada diez personas con discapacidad no superaron la educación básica, frente a poco más de tres de cada diez entre quienes no tienen discapacidad.

Tabla 9: Distribución porcentual por nivel educativo máximo alcanzado (2022-2024)

Nivel educativo	Sin discapacidad	Con discapacidad	Total
CASEN 2022			
Básica completa o menos	26,4%	62,4%	30,3%
Media completa	45,4%	27,5%	43,4%
Superior completa o más	28,2%	10,1%	26,3%
CASEN 2024			
Básica completa o menos	23,0%	60,2%	27,3%
Media completa	45,5%	29,0%	43,6%
Superior completa o más	31,5%	10,8%	29,1%

Nota: Distribución porcentual por nivel educativo máximo alcanzado para personas mayores de 18 años.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2022 y 2024.

Parte de esta brecha puede explicarse por un efecto generacional, ya que una proporción importante de las personas con discapacidad pertenece a cohortes de mayor edad que se educaron en contextos de menor cobertura del sistema. Sin embargo, al restringir el análisis a personas de 50 años o más, se observa que la brecha persiste incluso dentro del mismo grupo etario.

Tabla 10: Distribución de nivel educativo para personas mayores de 50 años

Nivel educativo - solo 50+ años (2024)	Sin discapacidad	Con discapacidad	Total
Básica completa o menos	44,4%	68,9%	49,9%
Media completa	34,1%	23,0%	31,6%
Superior completa o más	21,5%	8,0%	18,5%

Nota: Solo personas de 50 años o más.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2024.

Entre quienes tienen 50 años o más, el 68,9% de las personas con discapacidad no superó la educación básica, frente al 44,4% entre sus pares sin discapacidad. La diferencia de más de 24 puntos porcentuales dentro del mismo rango etario indica que la desventaja educativa no es solo un legado histórico, sino también el resultado de barreras específicas a lo largo de la trayectoria vital.

5.2 Brecha de empleo

La relación de las personas con discapacidad con el mercado laboral merece especial atención. La inserción laboral es una dimensión importante de su situación socioeconómica y las dificultades para acceder a un empleo pueden profundizar otras desventajas que ya enfrenta esta población.

Además, durante los últimos años Chile ha implementado políticas dirigidas específicamente a mejorar su inclusión laboral. La principal es la Ley N.º 21.015, que establece una cuota de contratación del 1% para las empresas de mayor tamaño. Sin embargo, el nivel de cumplimiento de esta obligación sigue siendo bajo. De acuerdo con el Informe del estado de cumplimiento de la cuota de contratación de la Ley N.º 21.015, a agosto de 2025, 1.545 de las 6.463 empresas privadas obligadas cumplían efectivamente con la cuota, equivalente a un 23,9%. Esta cifra se encuentra todavía lejos del 80% de cumplimiento requerido por la Ley N.º 21.690 para que la cuota aumente al 2%.

La evidencia disponible para Chile también muestra que las empresas han respondido a la normativa, aunque no necesariamente mediante nuevas contrataciones. Duryea, Martínez y Pereira (2023), en un experimento realizado con empresas obligadas por la ley, encuentran que un mensaje informativo aumentó el número de trabajadores registrados como personas con discapacidad, pero que este efecto estuvo explicado principalmente por la reclasificación de trabajadores ya empleados, más que por nuevas contrataciones. Las cifras agregadas muestran, al mismo tiempo, que las brechas de empleo siguen siendo importantes. Mientras la tasa de ocupación de las personas sin discapacidad aumentó 1,8 puntos porcentuales entre 2017 y 2024, entre las personas con discapacidad disminuyó 3,6 puntos en el mismo período.

Tabla 11: Tasa de ocupación (% de personas de 15 años y más que declaran estar ocupadas). CASEN 2017, 2022 y 2024

Categoría	2017	2022	2024
Sin discapacidad	59,5%	60,3%	61,3%
Con discapacidad	32,3%	28,7%	27,6%
Promedio población	57,3%	56,9%	57,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2017, 2022 y 2024.

Nota: Tasa de ocupación (% de personas de 15 años y más que declaran estar ocupadas).

La brecha de ocupación entre ambos grupos pasó de 27,2 puntos porcentuales en 2017 a 33,7 puntos en 2024. Esto ocurre, además, durante un período de recuperación general del empleo después de la pandemia. Mientras la tasa de ocupación de las personas sin discapacidad aumentó, entre las personas con discapacidad ocurrió lo contrario.

Vale la pena abrir una discusión sobre si el camino hacia adelante en materia de empleo debe continuar descansando principalmente en cuotas y sanciones, o si corresponde complementar este enfoque con incentivos y programas específicos para personas con discapacidad y sus hogares. Más que preguntarse únicamente si la Ley 21.015 ha tenido los efectos esperados, los datos presentados sugieren que la política laboral podría ampliarse, especialmente considerando la lenta recuperación post pandemia de este grupo y el aumento de su peso dentro de la población.

Para avanzar en ese frente, se considera que podrían evaluarse al menos tres líneas de política que suelen utilizarse para el fortalecimiento del mercado laboral, adaptadas al contexto chileno. Entre ellas: subsidios o créditos a la contratación en el sector privado, programas de empleo con apoyo que acompañen a la persona directamente en el puesto de trabajo, y un mayor control del cumplimiento en el sector público, que debiera liderar con el ejemplo. Dado que ninguna de estas alternativas cuenta aún con evidencia robusta en América Latina, resulta igualmente necesario invertir en evaluación rigurosa de las intervenciones que se implementen. Cualquier estrategia que ignore a los hogares con personas con discapacidad y a sus cuidadores estará abordando solo una parte del problema.

5.3 Brecha de empleo según quintil de ingreso

Adicional a lo anterior, CASEN permite profundizar el análisis de la situación laboral al desagregar los resultados por quintiles de ingreso autónomo. Esto permite observar con mayor detalle las diferencias dentro de la población y cómo las brechas laborales asociadas a la discapacidad varían según el nivel de ingresos.

Tabla 13: Tasa de ocupación por quintil de ingreso autónomo per cápita y situación de discapacidad

CASEN 2024	Q I	Q II	Q III	Q IV	Q V
Sin discapacidad	30,9%	52,2%	65,0%	75,5%	82,6%
Con discapacidad	13,4%	25,7%	36,0%	44,9%	56,7%
Brecha (pp)	17,5	26,5	29,0	30,6	25,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2024.

Nota: Tasa de ocupación por quintil de ingreso autónomo per cápita y situación de discapacidad. La brecha corresponde a la diferencia en puntos porcentuales entre ambos grupos dentro de cada quintil.

Como se observa en la tabla, la brecha en la tasa de ocupación es significativa en todos los quintiles y tiende a ampliarse en los tramos intermedios, alcanzando cerca de 30 puntos porcentuales. Si bien la ocupación aumenta con el nivel de ingreso para ambos grupos, las personas con discapacidad se mantienen sistemáticamente rezagadas. En particular, incluso en el quintil de mayores ingresos, su tasa de ocupación (56,7%) se ubica levemente por debajo del promedio nacional (57,5%), lo que evidencia que mayores ingresos no logran cerrar completamente las brechas laborales. Esto refuerza la idea de que la vulnerabilidad de este grupo no se explica únicamente por su posición socioeconómica, sino también por barreras persistentes en el acceso al empleo.

6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES DE POLÍTICA

Los datos de la CASEN 2024 muestran una realidad clara, y es que las personas con discapacidad conforman una población numerosa y en aumento, que enfrenta desventajas acumuladas en distintas dimensiones. Estas brechas no se están cerrando por sí solas; por el contrario, en ámbitos clave como el empleo y la distribución de ingresos, se han ampliado en los últimos años.

Cuatro hallazgos merecen atención prioritaria:

1. La discapacidad afecta hoy a cerca de uno de cada diez chilenos en las cifras CASEN, según los criterios utilizados en este informe. Como se ha mostrado, las características demográficas de este grupo no son aleatorias: se concentra en mayor medida en personas de mayor edad, en mujeres y, en términos absolutos, en la Región Metropolitana, mientras que, en términos relativos a su propia población, está mucho más concentrado en regiones. Además, considerando el progresivo envejecimiento de la población, es esperable que este grupo pueda aumentar en los próximos años, lo que exige que el sistema de protección social esté preparado para responder a una demanda creciente de apoyos.
2. La situación laboral de las personas con discapacidad sigue mostrando un rezago importante. En los últimos años, la brecha de ocupación respecto de las personas sin discapacidad se ha ampliado, pasando de 27,2 puntos porcentuales en 2017 a 33,7 puntos en 2024. Esta diferencia supera los 30 puntos porcentuales en los quintiles medios y persiste incluso en los hogares de mayores ingresos. A ello se suma el bajo cumplimiento de la cuota de contratación en el sector privado, que alcanza un 23,9%, todavía muy por debajo del umbral establecido para avanzar hacia una cuota del 2%.
3. La discapacidad no es un problema individual, sino de hogar. Con más del 50% de las personas con discapacidad siendo jefes o jefas de hogar, y con una probabilidad casi el doble de vivir en pobreza multidimensional, las políticas de apoyo deben pensar en la unidad familiar y no solo en el individuo.
4. El cuidado informal es masivo y está feminizado. La mayoría de los cuidadores son mujeres de mediana edad que asumen estas responsabilidades sin remuneración ni reconocimiento formal. Ignorar esta dimensión es perpetuar una forma invisible de desigualdad de género.

El análisis presentado es necesariamente acotado. La CASEN permite avanzar todavía más en dimensiones como los ingresos por fuente, el acceso a prestaciones, la calidad del empleo o las diferencias según tipo de discapacidad. Profundizar en esas áreas permitiría entender mejor una población que, como muestran los resultados de este informe, es numerosa y bastante heterogénea.

Contar con información periódica sobre su situación resulta especialmente importante en este caso. No solo porque persisten brechas relevantes en empleo, educación e ingresos, sino porque varias de ellas parecen haberse ampliado durante los últimos años.

Los avances normativos de la última década son importantes, pero los datos muestran que todavía queda espacio para fortalecer las políticas dirigidas a las personas con discapacidad y sus hogares. Esto será cada vez más relevante si se considera, además, el envejecimiento de la población chilena y el probable aumento de la cantidad de personas que enfrentarán algún tipo de limitación funcional durante los próximos años.

REFERENCIAS

- Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. (2026). *Dispone como beneficiarios de la cuota preferente de inclusión laboral a las y los cuidadores no remunerados y otras personas que indica* (Boletín N.º 18.283-35).
- Duryea, S., Martínez, C., & Pereira, M. A. (2023). Policies to promote the inclusion and well-being of people with disabilities: Evidence and knowledge gaps.
- Fundación ConTrabajo. (2025, 15 de diciembre). *Boletín de estadísticas N.º 6. Inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile*.
<https://fundacioncontrabajo.cl/descarga/boletin-estadisticas-inclusion-laboral/>
- Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nueva York: Naciones Unidas.
- ONU Mujeres (2021). Aceptando el desafío | Mujeres con discapacidad: por una vida libre de violencia. Una mirada inclusiva y transversal. ONU Mujeres América Latina y el Caribe.
- Vial, B. y Martínez, C. (2023). Discapacidad en adultos en Chile: menores ingresos del trabajo y mayores gastos. *Estudios Públicos*, 169, 69-120. <https://doi.org/10.38178/07183089/1312220128>



Observatorio
para la Inclusión